



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 4

4548/2024

COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL
FEDERAL c/ EN-LEY 27739 DTO 278/24 s/AMPARO LEY 16.986

Buenos Aires, de julio de 2024.-

Y VISTOS:

En los autos caratulados en la forma en que se indica en el epígrafe, en trámite por ante este Juzgado N° 4, Secretaria N° 7, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que:

RESULTA:

1.- El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (C.P.A.C.F.), a través de su apoderado, promueve acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional, a fin que se declare la la inconstitucionalidad del art. 14 (inciso 17 del art. 20 de la ley 25.246) de la ley 27.739 (B.O. 15 de marzo de 2024); el Decreto 278/2024 (B.O. 26 de marzo de 2024), así como también las Resoluciones 47 /2024 y 56/2024 de la Unidad de Información Financiera (UIF) (B.O. 19 de marzo y 26 de marzo de 2024, respectivamente) en cuanto alcanza a los abogados/as, y la Resolución 48/2024 también de la UIF (B.O. del 25 de marzo del corriente año).

Asimismo, requiere, como medida cautelar, la suspensión de la aplicación de las normas referenciadas ut-supra.

Manifiesta su preocupación respecto de la sanción y promulgación de la Ley N° 27.739, con relación a la obligación que establece respecto de los abogados y abogadas, matriculados en el Colegio que representa.



Afirma que la sanción de la ley modificatoria de la norma de lavados de activos importa, respecto de los abogados/as, una clara vulneración a la garantía constitucional de la defensa en juicio prevista en el art. 18 de la Constitución Nacional.

Menciona que la institución que representa se encuentra obligada por ley, a asegurar que el libre ejercicio profesional no se vea menoscabado de ningún modo. Añade que el C.P.A.C.F. debe asumir la defensa de los profesionales cuando sus legítimos derechos se encuentren amenazados.

Destaca que la entidad que representa se encuentra legitimada para cuestionar normas que vulneran abiertamente el libre ejercicio de la profesión regulada por la Ley N° 23.187.

Solicita que los efectos expansivos de la cosa juzgada en el presente pleito, sean extensivos al colectivo involucrado, alcanzando a todos los abogados y abogadas que pretendan asistir, ya sea como patrocinantes o apoderados, a sus clientes, respecto de las actividades enumeradas en el art. 20 inc. 17 de la Ley N° 25.246, según el texto introducido por el art. 14 de la Ley N° 27.739.

Considera que el art. 14 de la Ley N° 25.246 señala que los sujetos contemplados en el art. 20 de la Ley N° 25.246, en el marco de un reporte de operación sospechosa, de una declaración voluntaria o del intercambio de información con organismos análogos extranjeros, no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 4

Define que los servicios de la abogacía son todos aquellos que se requieren en función de los conocimientos legales del abogado/a. Añade que cualquier actividad contratada sobre la base de la formación legal de un abogado/a es ejercicio profesional de la abogacía.

Por lo expuesto, también relata que la información recibida del cliente, en todos los casos, está bajo el amparo del secreto profesional.

Puntualiza que es absolutamente arbitrario e infundado reducir la práctica de la abogacía solamente al litigio o al asesoramiento en función del litigio; repitiendo que la actividad de la abogacía es mucho más extensa y que siempre rige la relación de confidencialidad para los hechos que suministre el cliente.

Reflexiona que la normativa atacada, convierte al abogado/a en un delegado del Estado a fin que contribuya con éste para ejercer funciones de prevención y control sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Se pregunta ¿Cómo podría un abogado o abogada observar con finalidad el secreto profesional salvo autorización del interesado y a la vez encontrarse obligado a informar, en contra de dicho deber?. Ante ello, afirma que el conflicto de intereses es evidente, toda vez que la nueva ley obliga a los citados profesionales a incurrir en un incumplimiento de la ley de colegiación en lo que hace a los intereses confiados por sus clientes.

Insiste en que la obligación de guardar secreto profesional para la abogada y el abogado es un deber/derecho



reconocido a quienes ejercen la profesión; añadiendo que el mismo se encuentra receptado en todos los cuerpos normativos que regulan el ejercicio profesional.

Destaca que en la norma impugnada se observa un listado de operaciones en las cuales, al intervenir los abogados y abogadas preparando o realizando transacciones a nombre y/o por cuenta de sus clientes, se deben informar a la U.I.F.

Expresa que las modificaciones introducidas, vinculadas a la prevención y represión del Lavado de Activos (L.A.), de la Financiación del Terrorismo (F.T.) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (F.P.), siguen las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (G.A.F.I.). Añade que este último, se encarga de elaborar recomendaciones para los países y de evaluar el cumplimiento técnico de dichos estándares internacionales.

Recalca que, dejando de lado a quien conscientemente interviene en el hecho criminal a través de sus deberes jurídicos, los restantes abogados/as que se limitan a ejercer su profesión, efectúan un aporte neutro a la eventual comisión de un hecho ilícito.

Articula que la ley cuestionada en autos establece, mediante instrucciones con fuerza legal, una serie de requerimientos ilegales y carentes de todo sustento; añadiendo que la misma, en los hechos, importa dejar desprotegidas a las personas.

Expone que, a través de la normativa en trato, se pretende que los matriculados/as del C.P.A.C.F. se vean privados/as de ejercer una representación conforme a derecho; indicando que la





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 4

misma también determina que se encuentren imposibilitados/as de defender acabadamente los derechos e intereses de sus clientes o de sus mandantes, restringiéndose arbitrariamente el derecho a trabajar consagrado en el art. 14 de la Constitución Nacional.

Enfatiza que el privilegio de la confidencialidad es esencial para que el cliente pueda transmitir libremente a su abogado toda aquella información necesaria para ver efectivamente realizado su derecho a la defensa o bien para recibir un asesoramiento adecuado. A su vez, añade que se trata de la protección de la privacidad del cliente y de la preservación de la confianza del cliente en la profesión del abogado.

Entiende que las sanciones impuestas por la normativa impugnada en razón del ejercicio profesional del abogado, vulneran el principio constitucional del debido proceso, de defensa en juicio y de igualdad ante la ley. Ello, toda vez que, según invoca, el C.P.A.C.F. es el único habilitado para evaluar la conducta de sus matriculados, agregando que el Decreto 278/2024 impone deberes que se constituyen en una transgresión directa al derecho de propiedad de los clientes, obligando incluso a los abogados/as a la comisión de delitos.

En dicho asunto, resalta que no hay reglamentación alguna que pueda obligar a los abogados y abogadas a realizar las acciones impuestas por el Decreto N° 278/2024.

Reitera una vez más que la obligación de guardar secreto profesional para la abogada y el abogado es un deber/derecho reconocido a quienes ejercen la abogacía, receptado en todos los



cuerpos normativos que regulan el ejercicio profesional –Leyes Nros. 22.192 art. 14, inc. b), y 23.187 arts. 6 y 7- o las dictadas por las Provincias en ejercicio de sus competencias no delegadas.

Peticiona que la cuestión se resuelva como de puro derecho, toda vez que, según considera, no existe prueba alguna que resulte conducente a los fines de discernir una cuestión como lo planteada en autos.

Requiere una vez más, como medida cautelar, la suspensión de la aplicación del art. 14 de la Ley N° 27.739, las Resoluciones U.I.F. Nros. 47/2024, 48/2024 y 56/2024, y el Decreto N° 278/2024.

Pone de manifiesto que muchos abogados se ven enfrentados, durante la vigencia de la normativa impugnada, a situaciones de incertidumbre en cuanto a la colisión de deberes que se plantea. Añade que los mismos se exponen a situaciones pecuniarias y de inhabilitación.

Finalmente, pretende la inscripción en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y hace reserva del caso federal.

2.- El 12/04/2024 se declara la competencia del Juzgado y, mediante Resolución de fecha 23/04/2024 se admite la presente acción como proceso colectivo, teniéndose por conformada como tal por medio de la Resolución del 26/04/2024. Asimismo, se deja constancia que la misma fue inscripta en el Registro de Procesos Colectivos el 29/04/2024, conforme surge de las constancias que obran en el Sistema Informático Lex 100.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 4

3.- Con fecha 30/04/2024 se ordena el traslado del informe previsto en el art. 4 inc. 1 y 2 de la Ley N° 26.854 –ver diligenciamiento del DEOX N° 13726698 que consta en el Sistema Informático Lex 100 el 30/04/2024-; siendo el mismo contestado por el apoderado del Estado Nacional el 6/05/2024.

4.- Mediante Resolución de fecha 10/05/2024, se rechaza la medida cautelar peticionada por el Colegio aquí actor. Ante el recurso de apelación deducido en la causa, con fecha 17/05/2024 se formó incidente de apelación de medida cautelar y, en la misma fecha, fue remitido a la Excma. Cámara del Fuero. Se deja constancia que, con fecha 23/05/2024, la Sala III de la Excma. Cámara del Fuero, resolvió rechazar el recurso de apelación intentado y confirmó la resolución de este Juzgado suscripta con fecha 10/05/2024.

5.- Con fecha 15/05/2024, se ordena el traslado previsto en el art. 8° de la Ley N° 16.986, a fin que la parte demandada produzca el informe allí indicado.

6.- Mediante presentación efectuada con fecha 29/05/2024 (10.38 hs.), el Dr. Pablo Rafael Perchia, en su carácter de representante del Estado Nacional, produce el informe del art. 8° de la Ley N° 16.986, solicitando el rechazo de la acción impetrada por la parte actora, con expresa imposición de costas.

Informa que la República Argentina es miembro pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) desde el año 2000. Ante ello, sostiene que tanto la Ley N° 27.739 como la Resolución



U.I.F. N° 48/2024 fueron sancionadas siguiendo estrictamente los lineamientos del GAFI.

Pone en conocimiento que el GAFI es una organización intergubernamental creada en 1989 por los países integrantes del G-7; añadiendo que el mismo fija los estándares internacionales y promueve la efectiva implementación de políticas, medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir y combatir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como también otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional, la seguridad y la paz mundial.

Indica que a raíz del interés institucional del Estado Nacional en satisfacer los compromisos internacionales y por entender que la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una preocupación prioritaria del Estado, nuestro país introdujo una reforma significativa en su régimen penal al derogar el art. 25 de la Ley N° 23.737, sancionada en septiembre de 1989 como respuesta al mandato de la Convención de Viena.

A su vez, hace saber que la decisión político-criminal que llevó a la sanción de la Ley N° 25.246 -abril del año 2000-, sobre el “Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo”, estuvo motivada en dar cumplimiento técnico a los requisitos establecidos en el estándar del GAFI vigente en ese entonces. Añade que por la citada norma se incorporó por primera vez el tipo penal de Lavado de Activos al Código Penal de la Nación.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 4

Enfatiza que el cuerpo normativo atacado por la parte actora, no resulta antojadizo, ni arbitrario, ni mucho menos violatorio de garantías constitucionales. Expuesto ello, afirma que el dictado de las normas en la materia tiene basamento en la protección del orden económico y financiero.

Considera que el dictado de las normas en la materia en asunto, tiene la finalidad de evitar que diversas formas complejas de criminalidad transnacional puedan obtener recursos que les sirvan en actividades tales como inversiones inmobiliarias, compra de artículos suntuosos, obtención de armamento, entre otros.

Agrega que el interés protegido por toda la normativa de prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva se enfoca en dismantelar la capacidad económica y financiera de la mega criminalidad y, por otra parte, proteger por parte del Estado el circuito económico y financiero lícito a fin de que no ingresen capitales derivados de actividades delictivas.

Niega todos y cada uno de los hechos invocados por la parte actora; añadiendo que la normativa impugnada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal no resulta violatoria de los derechos y garantías amparados por la Constitución Nacional.

Entiende que la parte actora no ha alegado ni demostrado que la mera vigencia de las normas atacadas impida el ejercicio de la profesión de abogado, ni que su cumplimiento imponga un coste excesivo en cabeza de los profesionales.



Afirma que la acción de amparo es inadmisibile por no configurarse los requisitos constitucionales y legales para su procedencia; y considera que la acción impetrada no es la vía judicial idónea para encauzar las pretensiones de la parte accionante.

Pone de relieve que las normas cuestionadas fueron dictadas por las autoridades competentes en plena conformidad con al normativa legal vigente. Ante ello, también relata que las mismas no presentan vicio ostensible, notorio y grave, que permita concluir en su arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.

En este punto, sostiene que no existen dudas sobre la constitucionalidad de la Ley 27.729 –modificatoria de la Ley 25.246-, del Decreto N° 278/2024 y las Resoluciones UIF Nros. 47/2024, 48 /2024 y 56/2024. Asimismo, también destaca que no existe, ni se ha acreditado ninguna arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de las obligaciones establecidas por la normativa antilavado a los Sujetos Obligados individualizados por el art. 20, inc. 17 de la Ley N° 25.246.

Manifiesta que el Poder Legislativo no ha realizado otra cosa que cumplir su función constitucional de llevar adelante una razonable reglamentación de uno de los derechos constitucionales consagrados en el art. 14 de la Constitución Nacional; agregando que dicha norma, en forma previa a proceder a enumerar los derechos allí reconocidos a todos los habitantes de la Nación, señala que los mismos se ejercen “conforme las leyes que reglamentan su ejercicio”.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 4

Expone que la normativa cuestionada en autos tuvo en miras proteger bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento jurídico, como la seguridad pública, la libertad, la vida y la propiedad; así como también el orden económico.

Alega que la actora confunde el deber de diligencia exigible al administrador y mandatario requeridos para que pueda llevar adelante el objeto del mandato –preparar o realizar transacciones sobre las actividades detalladas en la norma-, con la facultad de representación para llevar adelante el objeto del mandato y las responsabilidades propias del mandante.

Menciona que la Resolución UIF N° 48/2024 expresamente indica que no es cliente toda persona humana o jurídica o estructura jurídica que requiera los servicios de un abogado para su defensa en procesos judiciales, administrativos, arbitrajes o mediaciones, incluidos el asesoramiento sobre cómo iniciarlos o evitarlos. Por ello, entiende que la normativa que ataca la actora no afecta de manera alguna el secreto profesional.

Aclara que la citada Resolución de la UIF no engloba a las actividades tradicionales de los abogados en los cuales se ve involucrada la defensa y/o asesoramiento de sus clientes. Ante lo expuesto, reitera una vez más que el secreto profesional se encuentra debidamente resguardado.

Pone de resalto que la República Argentina es miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); añadiendo que, desde ese entonces, nuestro país ha tenido un papel activo en la defensa y promoción de la Paz y la Seguridad



Internacional, los Derechos Humanos y el Desarrollo Sustentable. Destaca una vez más la importancia de la jerarquía de los tratados internacionales prevista en el art. 75 inc. 22 de la Ley Suprema, y su incorporación al derecho local.

Reitera que los derechos que la Constitución Nacional reconoce no son absolutos sino relativos. En consecuencia, expresa que los mismos son susceptibles de reglamentación y limitación, tanto para coordinar el ejercicio del derecho de uno con el ejercicio del derecho de otro, como para que cumplan su funcionalidad social en orden al bien común; así como también para tutelar el orden y la moral públicos, entre otras cuestiones.

Aduce que mediante el Decreto N° 918/2012 se reglamentaron las medidas y procedimientos previstos en el art. 6 in fine de la Ley N° 26.734, sobre congelamiento administrativos de bienes u otros activos vinculados a las actividades delictivas del art. 306 del Código Penal y el procedimiento de inclusión y exclusión de personas designadas en las listas elaboradas de conformidad con las Resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Indicado ello, informa que por medio del Decreto N° 278/2024 se modificó el Decreto N° 918/2022; añadiendo que conforme se desprende del Decreto N° 278/2024, el entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Unidad de Información Financiera (UIF) advirtieron la posibilidad de mejorar el cumplimiento técnico de la Recomendación N° 6 del GAFI sobre “Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 4

financiamiento del terrorismo”. Asegura que el mencionado decreto fue sancionado a los fines de llevar adelante tales mejoras.

Enfatiza que por el decreto atacado por el Colegio actor, se busca fortalecer el marco normativo e institucional vigente en torno al cumplimiento de los estándares internacionales en la materia y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relacionadas con aquella. Destaca que el mismo implicó una mejora en el sistema sobre la base de las vulnerabilidades detectadas en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aprobada en el año 2022.

Aclara que el sistema preventivo en el decreto en trato, se encuentra estructurado a partir de la participación y colaboración de los Sujetos Obligados, a los cuales se les exige un compromiso con el fenómeno del LA/FT/FPADM y sus modalidades de prevención. Agrega que conforme los lineamientos y objetivos que traza el Decreto N° 278/2024, se evita que los fondos lleguen a su destino; entendiendo que ello resulta fundamental en materia de prevención de estos delitos.

Sintetiza que el Decreto N° 278/2024 se adecua al derecho internacional en la materia, especialmente en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas –ONU-, Resoluciones Nros. 1267/1999 y 1373/2001 del Consejo de Seguridad de las Nacionales, el Convenio Internacional contra el Terrorismo y Recomendaciones 5 y 6 del GAFI. Añade que de esa forma, nuestro país cumple con las obligaciones que se encuentran a su cargo.



Remarca que el sistema preventivo tiene un alto impacto en la política pública de combate contra el LA/FT/FPADM; añadiendo que el mismo es el complemento imprescindible del sistema, toda vez que tiende a detectar y dificultar preventivamente cualquier operación con tales fines delictivos. A su vez, relata que los sujetos obligados se ubican en una posición de privilegio frente al resto de la comunidad a la hora de indagar cuándo una transacción tiene indicios de vinculación con la financiación del terrorismo.

Pone en conocimiento que el CPACF fue creado mediante la sanción de la Ley N° 23.187 de fecha 5 de junio de 1985, con el fin de controlar el ejercicio de la profesión de abogado y ejercer el gobierno de la matrícula respectiva en el ámbito geográfico de la Capital Federal y con referencia a las actuaciones profesionales en tal jurisdicción. Manifiesta que entre dichas funciones se encuentra, tal como lo prevé el art. 19 de la ley citada, el ejercicio del poder disciplinario sobre el abogado inscripto y el acatamiento de éste al cumplimiento de los deberes y obligaciones fijados por la norma. Referido ello, soslaya que dichas funciones no son propias y que fueron delegadas por el Estado mediante el dictado de leyes.

Realiza un análisis del derecho comparado, mantiene la reserva de la cuestión federal y solicita se rechace la acción de amparo, con costas.

7.- Con fecha 31/05/2024, se tiene por contestado el informe del art. 8 de la Ley N° 16.986 producido por el Estado Nacional, ordenándose del mismo traslado a la parte actora.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 4

8.- Con fecha 19/06/2024 (18.53 hs.), la parte actora contesta el traslado del informe del art. 8º de la Ley 16.986 producido por el Estado Nacional.

Aclara que su parte solicitó la declaración de inconstitucionalidad sobre la base de la afectación del secreto profesional en relación con el ejercicio profesional de la abogacía y se remite a lo expuesto en el escrito de demanda.

Expone que la demandada olvida que los abogados solo están exceptuados de reportar transacciones sospechosas si la información se obtuvo en condiciones de secreto profesional. Sin perjuicio de ello, asegura que sí están obligados a informarlas de acuerdo con las conductas descriptas por el art. 14 de la Ley Nº 27.739 que sustituyó el artículo 20 de la Ley Nº 25.246.

Considera que la reforma introducida a la Ley 25.246, así como su aplicación a la clase integrada por los abogados y abogadas representados/as, acredita la existencia de caso.

En cuanto a la impugnación de la vía intentada, sostiene que la misma luce meramente dilatoria y debe ser rechazada.

Relata que está frente a una palmaria restricción del derecho a trabajar; añadiendo que el ejercicio profesional se ve afectado en tanto los abogados y las abogadas se ven amenazados de ser multados e incluso suspendidos en su matrícula. Ello, conforme indica, por violentar normas éticas bajo la exclusiva potestad sancionatoria del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Pone de relieve que su parte reclama la tutela jurisdiccional a la arbitrariedad e ilegalidad que manifiesta tanto la



ley cuestionada como la restante normativa impugnada respecto de la clase representada, cercenando el derecho a trabajar al prohibirles a los abogados ejercer la representación de sus clientes conforme a derecho y, consecuentemente, el derecho de propiedad de los profesionales abogados y abogadas representados en el proceso.

Insiste en que la confidencialidad que protege es la esencia misma de la actividad abogadil; invocando que el principal fundamento del deber que tienen los abogados de mantener estricto secreto sobre toda aquella información que llega a su conocimiento a través de sus clientes, es la propia defensa de estos.

Menciona que los abogados no dan fe pública y que la integridad de la información que aportan los clientes, para el debido asesoramiento o defensa de sus derechos, nunca ha de ser pública.

Expone que la profesión abogadil necesita, para ser ejercida de forma eficaz, que la información que les llega a través de sus clientes goce de estricta reserva para permitir así una efectiva defensa de los derechos de éstos últimos.

Considera que las propias manifestaciones del Estado en estas actuaciones reconocen el rol relevante de los escribanos como sujetos informantes, reservando para los abogados el aporte de otra información que resultaría complementaria para la investigación.

Afirma una vez más que la Ley de Lavado de Activo provoca una desnaturalización de la profesión de los abogados y las abogadas; añadiendo que la misma afecta el derecho a la tutela efectiva de todos los ciudadanos.





Poder Judicial de la Nación

**JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 4**

Alega que los abogados y abogadas no pueden restringir la propiedad de sus clientes so pretexto de estar cumpliendo recomendaciones y/o normas interpretativas del GAFI. Invoca que las normas impugnadas que pretenden imponer sanciones a los citados profesionales vulneran el debido proceso, el derecho de defensa y el juez natural de la causa, amparados como derechos constitucionales y fundamentales del ser humano en el art. 18 de la Constitución Nacional y en las Convenciones Internacionales.

Finalmente, hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar a la pretensión formulada en el escrito liminar, con costas.

9.- Requerida la opinión del Sr. Fiscal Federal de conformidad con lo dispuesto en el Art. 31 de la Ley N° 27.148, éste dictamina con fecha 1/07/2024 (8.59 hs.).

10.- Mediante Resolución de fecha 4/07/2024, la suscripta ratificó en un todo, la Resolución de Inscripción de fecha 26 /04/2024; ello, de conformidad con lo establecido en el sub punto 1) del acápite VIII) de la Acordada N° 12/16 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

11.- Finalmente, pasan los autos a sentencia, y...

CONSIDERANDO:

I.- Antes de ingresar al tratamiento de las cuestiones sometidas a mi decisión es importante recordar que no me encuentro obligada a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración del Tribunal, sino tan solo aquellas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (CSJN, Fallos: 258



:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970).

II.- Asimismo, corresponde señalar que la presente acción se inició y sustanció como proceso de amparo, de conformidad con las normas contenidas en el art. 43 de la Constitución Nacional y la Ley N° 16.986.

III.- Que dicho lo que antecede, a los fines de dilucidar la cuestión sometida a decisión en el ámbito propio de este proceso, me parece conveniente recordar que el progreso de la vía excepcional elegida, procede contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, un tratado o una ley, los cuales deben surgir con nitidez y evidencia en el curso de un breve debate (conf. art. 43, CN y art. 1 y 2 de la ley 16.986).

IV.- En este orden de ideas, corresponde señalar que las circunstancias de admisibilidad referidas precedentemente *excluye que pueda convertirse en una instancia en que los jueces asuman facultades propias de otras autoridades públicas o poderes o se constituyan en revisores de su actuar dentro de las normas respectivas* (conf. CNACAF, Sala III in re: “Borensztein y Gicovate S.A. c/ Obras Sanitarias de la Nación”), o incluso que se someta a la vigilancia judicial el desempeño de funcionarios u organismos para juzgar su acierto o desacierto (CSJN. FALLO: 302:535).





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 4

V.- Que en este sentido, es dable resaltar que es jurisprudencia reiterada, que la acción de amparo excluye aquellas cuestiones en las que *no surge* con nitidez la arbitrariedad o ilegalidad que se arguye y que esta acción, que no tiene por finalidad alterar las instituciones vigentes ni faculta a los jueces a sustituir sus trámites y requisitos previamente instituidos ni los autoriza a irrumpir en asuntos extraños a la jurisdicción que por la ley tiene conferida (CSJN, FALLO: 307:178).

Que ello así, se ha señalado que la ilegalidad o arbitrariedad manifiestas a que se refieren la Ley N° 16.986 y la Constitución Nacional, causantes de una efectiva lesión de los derechos o garantías reconocidos por esta última, deben aparecer en forma *clara e inequívoca*, sin necesidad de un largo y profundo estudio de hechos, ni de un amplio debate y prueba. Así lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Asociación del Personal Superior de SEGBA c/ Gobierno Nacional, Ministerio de Economía” (Fallo 307:747). La ilegalidad, debe manifestarse en forma notoria, **siendo insuficiente alegar una conducta estatal cuestionable, sosteniendo que se afecta o restringe algún derecho constitucional.**

En adición a lo expuesto precedentemente respecto de la acción de amparo, es dable poner de relieve que la Excma. Cámara del Fuero, Sala III, en los autos “VILLAZANTI, MATIAS RAMÓN c /EN M JUSTICIA DDHH- SPF s/ AMPARO LEY 16.986”, Expediente N° 2589/2022, con fecha 6/09/2022, expresó: “...*el amparo es un proceso sólo utilizable en las delicadas y extremas*



situaciones y la apertura de esta acción requiere la demostración de que el daño concreto y grave ocasionado sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la vía urgente y expedita del amparo de conformidad con lo establecido en el art. 43 de la Constitución Nacional y el art. 1º de la ley 16.986... es indispensable que se acredite –en debida forma y como uno de los requisitos inexcusables para su viabilidad– la inoperancia de las vías ordinarias existentes a fin de reparar el perjuicio invocado (C.S., Fallos: 274:13; 300 :1231), o que la remisión a ellas produzca un gravamen serio no susceptible de reparación ulterior... en la acción de amparo resultan descartadas aquellas situaciones que requieren un amplio marco de debate y prueba, o cuando los perjuicios que pueda ocasionar su rechazo no son otra cosa que la situación común de toda persona que peticiona el reconocimiento de sus derechos por los procedimientos ordinarios, pues esta acción no tiene por finalidad alterar las instituciones vigentes ni faculta a los jueces a sustituir los trámites y requisitos previamente instituidos...” (el destacado me pertenece).

En esta misma línea, la Sala IV de la Excma. Cámara del Fuero, en los autos “SUELVES SAS c/EN-AFIP s/AMPARO LEY N° 16.986”, Expediente N° 18697/2021, con fecha 1/09/2022 –alta en sistema 5/09/2022-, indicó: “...Se trata de un remedio procesal excepcional, sólo utilizable en las delicadas y extremas situaciones en que, por carencia de otras vías legales aptas, peligra la salvaguardia de derechos fundamentales, requiriéndose para su apertura circunstancias de muy definida excepción, tipificadas por la





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 4

*presencia de arbitrariedad, irrazonabilidad o ilegalidad manifiestas que configuren la existencia de un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta acción urgente y expedita (Fallos: 297:93; 298:329; 299:185; 300; 200, 1231; 306:1253)... la Corte federal precisó que siempre que aparezcan de modo claro y manifiesto la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas así como el daño grave e irreparable, corresponderá que los magistrados restablezcan de inmediato el derecho restringido por la rápida vía del amparo. Sin embargo, agregó que **los jueces deben extremar la ponderación y la prudencia (lo mismo que en muchas otras cuestiones propias de su alto ministerio) a fin de no decidir, por el sumarísimo procedimiento de esta garantía constitucional, cuestiones susceptibles de mayor debate y que corresponda resolver de acuerdo con los procedimientos ordinarios...**” (el destacado me pertenece).*

VI.- Que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (C.P.A.C.F.), interpone acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional, a fin que se declare la inconstitucionalidad del art. 14 (inciso 17 del art. 20 de la ley 25.246) de la ley 27.739 (B.O. 15 de marzo de 2024); el Decreto 278/2024 (B.O. 26 de marzo de 2024), así como también las Resoluciones 47/2024 y 56/2024 de la Unidad de Información Financiera (UIF) (B.O. 19 de marzo y 26 de marzo de 2024, respectivamente) en cuanto alcanza a los/as abogados /as, y la Resolución 48/2024 también de la UIF (B.O. del 25 de marzo de 2024).



Esgrime que la normativa impugnada vulnera el secreto profesional; indicando que los/as abogados/as, para poder ejercer eficazmente su profesión, requieren a sus clientes toda la información que necesitan para defender los derechos de estos. Asimismo, añade que la información recibida, muchas veces de índole personal y privada, se encuentra necesariamente cubierta por una relación de confidencialidad; y que si no existiera esa reserva, no se suministrarían esos hechos y las personas quedarían indefensas.

Asimismo, refiere que los abogados/as tienen el estricto deber de mantener en secreto todos los hechos y circunstancias que conocen a través de sus clientes; agregando que el secreto en cuestión, hace a la esencia de su actividad profesional.

VII.- Referenciado ello y por razones de buen orden, corresponde efectuar una breve reseña de la normativa cuestionada por el Colegio actor.

- 14 de la Ley N° 27.739: *“Sustituyese el artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente: Artículo 20: **Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), de conformidad con las normas que dicte dicho organismo, los siguientes sujetos:...** 17. **Los abogados, contadores públicos y escribanos públicos, únicamente cuando a nombre y/o por cuenta de sus clientes, preparen o realicen transacciones sobre las siguientes actividades:** a) *Compra y/o venta de bienes inmuebles, cuando el monto involucrado sea superior a setecientos (700) salarios mínimos, vitales y móviles;* b) *Administración de bienes y/u otros activos cuando el monto involucrado sea superior a ciento cincuenta (150)**





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 4

*salarios mínimos, vitales y móviles; c) Administración de cuentas bancarias, de ahorros y/o de valores cuando el monto involucrado sea superior a cincuenta (50) salarios mínimos, vitales y móviles; d) Organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas; e) Creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y la compra y venta de negocios jurídicos y/o sobre participaciones de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas. En el caso de los contadores, quedan comprendidas, además de las transacciones señaladas, la confección de informes de auditoría de estados contables. **Los abogados, escribanos públicos y contadores públicos que actúan como profesionales independientes no están obligados a reportar transacciones sospechosas si la información relevante se obtuvo en circunstancias en las que estos están sujetos al secreto profesional ...**” (el destacado me pertenece).*

- **Decreto 278/2024:** “...Los sujetos obligados deberán efectuar, sin demora e inaudita parte, el congelamiento de los bienes u otros activos involucrados en las operaciones cuando se verifique alguna de las circunstancias expuestas en el artículo 3° del presente, procediendo a congelar: a) todos los fondos y otros activos pertenecientes o controlados por la persona o entidad designada y no solo los que puedan estar vinculados a un acto, plan o amenaza terrorista en particular; b) los bienes u otros activos pertenecientes o controlados total o conjuntamente, directa o indirectamente, por personas o entidades designadas; c) los bienes u otros activos



derivados o generados por bienes u otros activos pertenecientes o controlados directa o indirectamente por personas o entidades designadas; o d) los bienes u otros activos de personas y entidades que actúan en nombre o bajo la dirección de personas o entidades designadas. Asimismo, los sujetos obligados deberán informar, inmediatamente, a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) la aplicación de la medida de congelamiento y emitir, sin demora alguna, un Reporte de Operaciones Sospechosa de Financiación del Terrorismo...”.

- Resolución N° 47/2024 de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) –B.O. 19/03/2024-: “... *Los Sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberán presentar ante la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) la documentación respaldatoria de su inscripción en el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO+)...*”.

- Resolución N° 48/2024 de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) –B.O.25/03/2024-: “...*La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), que los abogados contemplados como Sujetos Obligados en el inciso 17 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberán adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros*





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 4

con objetivos criminales de LA/FT... Actividades Específicas: a) Compra y/o venta de bienes inmuebles, cuando el monto involucrado sea superior a setecientos (700) salarios mínimos, vitales y móviles; b) Administración de bienes y/u otros activos cuando el monto involucrado sea superior a ciento cincuenta (150) salarios mínimos, vitales y móviles; c) Administración de cuentas bancarias, de ahorros y/o de valores cuando el monto involucrado sea superior a cincuenta (50) salarios mínimos, vitales y móviles; d) Organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas; e) Creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y la compra y venta de negocios jurídicos y/o sobre participaciones de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas... Cliente: a toda persona humana, jurídica u otras estructuras jurídicas -nacionales y/o extranjeras-, y quienes actúen por cuenta y orden de éstas; con los cuales se establezca, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial. En consecuencia, no es Cliente, toda persona humana o jurídica o estructura jurídica -nacional o extranjera- que requiera los servicios de un abogado para su defensa en procesos judiciales, administrativos, arbitrajes o mediaciones, incluido el asesoramiento sobre como iniciarlos o evitarlos... Sujetos Obligados: los abogados, únicamente cuando a nombre y/o por cuenta de sus Clientes, preparen o lleven a cabo cualquiera de las Actividades Específicas, según se las define en la presente, sea que lo realicen en forma independiente o como socios o empleados de una



firma de servicios profesionales... El Sujeto Obligado no estará obligado a reportar operaciones sospechosas si la información relevante se obtuvo en circunstancias en las que éste está sujeto al secreto profesional... ” –el destacado me pertenece-.

- Resolución N° 56/2024 de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) –O. 26/03/2024-: “...-Sustitúyase el inciso c) de los artículos 27 de la Resolución UIF N° 242/2023, 26 de la Resolución UIF N° 42/2024 y 26 de la Resolución UIF N° 48 /2024 por el siguiente: “Enviarse a la UIF, una vez analizada la/s operación/es, sin demora alguna, contando con un plazo de: i. VEINTICUATRO (24) HORAS, computadas a partir de la fecha en que el Sujeto Obligado concluya que la operación reviste tal carácter en los casos de Lavado de Activos. Asimismo, la fecha de reporte no podrá superar los NOVENTA (90) días corridos contados desde la fecha en que la Operación Sospechosa de Lavado de Activos fue realizada o tentada. ii. VEINTICUATRO (24) HORAS, computadas a partir de la fecha de la operación realizada o tentada en los casos de Financiación de Terrorismo. iii. VEINTICUATRO (24) HORAS, computadas a partir de la fecha de la operación realizada o tentada en los casos de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” ... ”.

VIII.- Introduciéndonos en la cuestión, es importarte traer a conocimiento que el Grupo de Acción Financiera Internacional (G.A.F.I.) es una organización intergubernamental creada en el año 1989 por los países integrantes del G-7 (“El Grupo de los Siete”), que fija los estándares internacionales y promueve la efectiva





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 4

implementación de políticas, medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir y combatir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), así como también otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional, la seguridad y la paz mundial.

Que el citado Grupo, actualmente, cuenta con 40 (cuarenta) miembros (38 jurisdicciones y 2 organizaciones regionales –la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo-), 9 miembros asociados y 25 organizaciones observadoras. A su vez, es del caso señalar que nuestro país es miembro pleno, tanto del Grupo de Acción Financiera Internacional (G.A.F.I.), como del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (G.A.F.I.L.A.T.), desde el año 2000.

Para el cumplimiento de sus objetivos, el G.A.F.I. emite una serie de recomendaciones conocidas como los *“Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y, la Financiación del Terrorismo, y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”*, las cuales conforman las bases para poder dar solución a las amenazas de los asuntos indicados precedentemente. A su vez, **evalúa el progreso de sus miembros en la implementación efectiva de las medidas necesarias para combatir el LA/FT/CFPADM y verifica el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas a los Estados**; así como también, en colaboración con otras organizaciones y socios internacionales, trabaja para identificar las vulnerabilidades de los sistemas



nacionales. Todo ello, con el objetivo de proteger el Sistema Financiero Internacional.

Considerado ello, entiendo oportuno señalar que la **Recomendación N° 3 del G.A.F.I.** expresa que “...*Los países deben tipificar el lavado de activos en base a la Convención de Viena y la Convención de Palermo. Los países deben aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves, con la finalidad de incluir la mayor gama posible de delitos determinantes...*”. A su vez, mediante la **Recomendación N° 4** de aquél, se expone: “... *Los países deben adoptar medidas incluyendo medidas legislativas, que permitan a sus autoridades competentes congelar o incautar y decomisar lo siguiente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe: (a) bienes lavados, (b) producto de, o instrumentos utilizados en, o destinados al uso en, delitos de lavado de activos o delitos determinantes, (c) bienes que son el producto de, o fueron utilizados en, o que se pretendía utilizar o asignar para ser utilizados en el financiamiento del terrorismo, actos terroristas u organizaciones terroristas, o (d) bienes de valor equivalente. Estas medidas deben incluir la autoridad para: (a) identificar, rastrear y evaluar bienes que están sujetos a decomiso; (b) ejecutar medidas provisionales, como congelamiento y embargo, para prevenir manejos, transferencias o disposición de dichos bienes; (c) adoptar medidas que impidan o anulen acciones que perjudiquen la capacidad del Estado para congelar o embargar o recuperar los bienes sujetos a decomiso; y (d) tomar las medidas de investigación apropiadas. Los países deben considerar la adopción de medidas que permitan que*





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 4

tales productos o instrumentos sean decomisados sin que se requiera de una condena penal (decomiso sin condena), o que exijan que el imputado demuestre el origen lícito de los bienes en cuestión que están sujetos a decomiso, en la medida en que este requisito sea compatible con los principios de sus legislaciones nacionales...”.

IX.- Establecido este marco, es dable considerar que en la República Argentina, mediante la Ley N° 26.734, sancionada en el año 2011, se reforzó el sistema de prevención y lucha contra estos flagelos al modificar las disposiciones penales vinculadas al terrorismo y su financiación, y al facultar a la Unidad de Información Financiera (U.I.F.).

Que por medio del art. 2° del Decreto N° 489/2019, se incorporó al Decreto N° 918/12 el Capítulo V, denominado “Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento” (RePET). El citado Registro, tiene por finalidad brindar acceso e intercambio de información sobre personas humanas, jurídicas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y/o su financiamiento y facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento.

En adición a lo narrado precedentemente, corresponde traer a conocimiento que la Excma. Cámara del Fuero, Sala III, en los autos “ACE SEGUROS SA Y OTROS c/UIF s/ CODIGO PENAL –LEY 25.246- DTO 290/07 ART. 24”, Expediente N° 14600/2017, con fecha 27/06/2019 –alta en sistema 1/7/2019-, sostuvo: “*...cabe recordar que la ley 25.246 creó la Unidad de Información Financiera (UIF), quien es la encargada del análisis, el tratamiento*



*y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos y el de financiación del terrorismo (artículo 6°). A través del artículo 14 de la referida norma se le otorgó diversas facultades, entre las cuales se encuentran, y en cuanto aquí importa, la de **emitir directivas e instrucciones a cumplir e implementar por los sujetos obligados...**” (el destacado me pertenece).*

De este modo, el impacto del Grupo de Acción Financiera Internacional (G.A.F.I.) en la evolución del sistema argentino para combatir el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA, FT y PADM) es innegable. A lo largo de la evolución de nuestro sistema interno de PLA/FT/PADM, las evaluaciones mutuas y las recomendaciones de este organismo han sido el principal motor de los cambios normativos implementados en el país. Además, la amenaza de ser incluido en las listas grises o negras, con las consiguientes consecuencias adversas, ha impulsado a nuestro país a alinear su legislación con los correspondientes estándares internacionales.

No obstante, más allá de la influencia externa, **considero oportuno destacar la firme voluntad política demostrada por los sucesivos gobiernos argentinos en estos últimos tiempos para fortalecer el sistema argentino de PLA/FT /PADM y la colaboración que se ha dado en las últimas transiciones de autoridades de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.).** Cada una de las reformas llevadas a cabo en





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 4

asunto en trato, desde la tipificación inicial del lavado de activos hasta la reciente Ley 27.739, entiendo que ha respondido al objetivo de que Argentina no sea sancionada y se mantenga en línea en el cumplimiento de las recomendaciones del G.A.F.I. en esta materia. Esta determinación, ha llevado a Argentina a desplegar esfuerzos significativos en la actualización constante de su marco normativo, la creación de organismos especializados y la adopción de enfoques basados en riesgos.

X.- Que en otro punto, es del caso señalar que la Ley N° 27.739 nace como consecuencia de un proyecto enviado al Congreso el 31 de mayo de 2022, el cual fuera oportunamente impulsado por la U.I.F. y trabajado en colaboración con los demás actores del Sistema de Prevención argentino, entre los que encontramos a la Administración Federal de Ingresos Públicos –A.F.I.P.-, al B.C.R.A., a la Comisión Nacional de Valores –C.N.V.-, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social –I.N.A.E.S.-, la Superintendencia de Seguros de la Nación –S.S.N.-, la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, el Ministerio Público Fiscal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y los Ministerios de Economía, de Justicia y DDHH y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de ese momento.

Esta iniciativa, tuvo como causa llegar a cumplir con el último entendimiento que firmó Argentina con el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.) e incluyó las sugerencias de mejoras hechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (G.A.F.I.). A su vez,



es del caso recordar que el tratamiento del proyecto de reforma citado precedentemente, ha sido **aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación en el mes de abril de 2023** y elevado al **Senado de la Nación del Honorable Congreso de la Nación** el 11 de julio del mismo año, **tratado por dicho cuerpo legislativo el 14 de marzo del corriente 2024 y aprobado por unanimidad.**

Es dable indicar que la Ley 27.739 unificó las obligaciones aplicables a los sujetos obligados de la Ley 25.246 en el nuevo art. 21. En el que se ha incorporado, además de la imposibilidad de los sujetos obligados de dar inicio o continuar la relación con clientes respecto de los cuales no se los haya podido identificar debidamente o no se les haya podido realizar un monitoreo y/o debida diligencia continua de la relación comercial, contractual, económica y/o financiera, la obligación de determinar el riesgo de LA, FT y PADM asociado al cliente y su operatoria, a los productos, servicios, transacciones, operaciones o canales de distribución, a la zona geográfica involucrada, realizar una autoevaluación de tales riesgos e implementar medidas idóneas para su mitigación.

Sentado ello, corresponde mencionar que la ley N° 27.739 introduce una reforma profunda al sistema de PLA/FT/PADM argentino, centrándose la misma en **cinco grandes ejes o aspectos clave**, que incluyen:

X.I - Establecimiento del Control Parlamentario: Se incluye entre las responsabilidades de la Comisión Bicameral Permanente de fiscalización de organismos y actividades de





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 4

inteligencia, al monitoreo de las labores llevadas a cabo por la Unidad de Información Financiera.

X.II - Registro de Proveedores de Activos Virtuales:

Se establece el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, dentro del ámbito regulatorio natural de la CNV, organismo éste que luego procedió de manera casi inmediatamente a reglamentar dicho Registro a través de la citada Resolución CNV N° 994/2024 de fecha 22 de marzo de 2024.

X.III - Creación de un registro centralizado de Beneficiarios Finales: Este registro se establece en la órbita de la AFIP, para que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, garantizando a las autoridades competentes en la materia el pleno acceso al mismo.

X.IV - Modificación del Código Penal: Además de incorporar al Art. 303 del Código Penal de nuestro país nuevos delitos a ser tenidos en cuenta como delitos precedentes del delito de lavado de activos, tales como delitos ambientales y otros, y dado que el bien jurídico tutelado de este delito es el orden económico y financiero (tal como lo indica el propio Título XIII del Código penal dentro del cual se encuentra el citado art. 303), toda vez que con el mismo se intenta preservar un bien jurídico supraindividual o colectivo cuya afectación opera en desmedro de la estabilidad, seguridad y desarrollo económico-financiero formalmente instituido, se procedió a aumentar significativamente el monto que establece la punibilidad del delito de lavado, pasando del importe de \$ 300.000



(Pesos trescientos mil), a un importe determinable de 150 Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

X.V- Reforma de la Ley N° 25.246: Entre los aspectos más importantes de la reforma a la ley, se encuentran:

- Nuevas Sanciones: Se incorporan las sanciones de apercibimiento, apercibimiento con publicación del acto administrativo que dispuso la sanción, la inhabilitación para ejercer el cargo de oficial de cumplimiento, y la posibilidad de que la U.I.F. sugiera a los órganos de contralor específicos del sujeto obligado incumplidor, la revocación de la autorización para funcionar del sujeto obligado y/o la inhabilitación de su título habilitante.

- Multas: Creación de una Unidad de medida. Se incorpora una unidad de medida (Módulos) para las sanciones cualitativas, permitiendo su actualización periódica por parte de la U.I.F. sin necesidad de modificar la ley.

- Procedimiento de Ejecución Fiscal: Se establece que las multas serán cobradas a través del procedimiento de ejecución fiscal previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, simplificando su proceso de recupero. En ese sentido, se agrega que la copia certificada de la resolución que aplique la multa será suficiente para iniciar un proceso de ejecución fiscal, sin necesidad de recurrir a procedimientos adicionales.

- Facultades para la Unidad de Información Financiera (U.I.F.): A los fines de alinear la ley a los estándares internacionales, la Ley 27.739 incorporó a la Ley 25.246, con relación a la U.I.F., entre otros aspectos: su autarquía funcional, administrativa y





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 4

económica, además de la financiera; la utilización del enfoque basado en riesgos, tanto para las supervisiones del sistema PLA/FT/PADM que efectúe como para las directivas e instrucciones (regulaciones) que imparta; la facultad de la UIF de disponer sanciones financieras dirigidas, es decir, el congelamiento administrativo de fondos u otros activos, mediante resolución fundada y con comunicación inmediata al Ministerio Público Fiscal y/o al juez competente, vinculado a operaciones sospechosas de financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; y la facultad de disponer medidas específicas de mitigación de riesgos (contramedidas) a las relaciones comerciales y transacciones con personas humanas y jurídicas, e instituciones financieras, procedentes de jurisdicciones de mayor riesgo.

- Nuevos Sujetos Obligados: Incorpora como sujetos obligados, siguiendo los lineamientos del apartado (d) de la Recomendación 22 del G.A.F.I., a cualquier profesional (distinto de los Contadores, Escribanos y Abogados expresamente allí indicados) que a nombre y/o por cuenta de sus clientes, preparen o efectivamente lleven a cabo alguna de las siguientes transacciones: a) Compra y/o venta de bienes inmuebles; b) Administración de dinero, valores y/u otros activos; c) Administración de cuentas bancarias, de ahorros y/o de valores; d) Organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas y; e) Creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y la compra y venta de negocios jurídicos y/o sobre participaciones de personas jurídicas



u otras estructuras jurídicas. Ello, indicando expresamente que **los abogados, escribanos públicos y contadores públicos que actúan como profesionales independientes no están obligados a reportar transacciones sospechosas si la información relevante se obtuvo en circunstancias en las que estos están sujetos al secreto profesional.**

Analizado ello, entiendo que la normativa en trato fue impulsada con objetivo de cumplimentar con las Recomendaciones emitidas por el G.A.F.I, así como también satisfacer los compromisos internacionales asumidos en la materia tales como la "Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas" —Viena, 19 de diciembre de 1988— aprobada por nuestro país mediante la Ley N° 24.072, el "Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo" —Nueva York, 9 de diciembre de 1999— aprobado mediante la Ley N° 26.024 y la "Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional", aprobada mediante Ley N° 25.632, y por entender que la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una preocupación prioritaria del Estado.

En dicho asunto, es del caso recordar que: “...*el art. 75 inc. 22, contiene varias disposiciones. En efecto, establece la competencia del Congreso Federal para aprobar o rechazar los tratados y concordatos –celebrados con las demás naciones, las organizaciones internacionales, y la Santa Sede, respectivamente- en concordancia con lo dispuesto por el art. 99 inc.11, respecto del Poder Ejecutivo; declara que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes, enumera una serie de convenciones*





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 4

sobre derechos humanos a las que reconoce jerarquía constitucional, bajo determinadas condiciones y efectos; dispone los requisitos de la denuncia de esos tratados y habilita la jerarquización constitucional de otros tratados de derechos humanos, bajo ciertos recaudos... La reforma constitucional de 1994, dispuso expresamente que todos los tratados están por encima de las leyes, sean bilaterales; multilaterales; acuerdos de integración o concordatos con la Santa Sede... Las condiciones de vigencia de los tratados indican tanto el modo en que fueron aprobados y ratificados por la República Argentina, es decir, con las reservas respectivas, como el alcance interpretativo de las cláusulas del tratado por la jurisprudencia internacional...” –el destacado me pertenece- (Dra. María Angélica Gelli “Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada”, 4ta. Edición ampliada y actualizada, Tomo II, Editorial La Ley, págs. 219-220).

XI.- Puntualizada la normativa en cuestión y desarrollado el contexto del asunto planteado en autos, es dable recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que **la primera fuente de interpretación de la ley es su letra**, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir del texto legal, y **cuando ella no exige esfuerzo en su hermenéutica debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma** (confr., Fallos: 335



:608). Asimismo, ha precisado que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a su intención, teniendo la letra de la ley como primera fuente para determinarla (confr., Fallos: 313:254).

Que la inconsecuencia del legislador no se supone, por lo que la interpretación –en caso de corresponder- debe evitar asignar a la ley un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el criterio que las concilie y suponga la integral armonización de sus preceptos. Más allá de las posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación, la ley debe ser interpretada indagándose su verdadero alcance mediante un examen de sus términos que consulte la racionalidad de la norma, no de una manera aislada o literal, sino computando la totalidad de sus preceptos de manera que guarden debida coherencia (Fallos: 289:185; 296:372; 306:721; 307:518 y 993; 315:2668; 316:2390; 327:931; 329:2876; 330:304, 4713 y 1910; 334:485; 323:3289 y 3619; 330:1785; 339:323, entre otros).

En adición al marco de interpretación indicado ut-supra y en cuanto a la inconstitucionalidad planteada por el Colegio aquí actor, es dable reseñar que la Excma. Cámara del Fuero, Sala III, en los autos “ACE SEGUROS SA Y OTROS c/UIF s/ CODIGO PENAL –LEY 25.246- DTO 290/07 ART. 24” –jurisprudencia mencionada ut-supra-, señaló que “...*la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad institucional, que debe considerarse como la última ratio del orden jurídico* (confr.,





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FEDERAL 4

CSJN, Fallos: 312:72; 316:1718; 322:842; 325:1922; 326:3882, entre muchos otros). Por ello, no cabe admitirla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca derechos o garantías constitucionales, supuesto que, en el caso, no se encuentra mínimamente acreditado ... ” (el destacado me pertenece).

Asimismo, es oportuno traer a conocimiento lo dispuesto recientemente (26/03/2024) por la citada Sala III de la Excma. Cámara del Fuero, en los autos “UNION DE EMPLEADOS DE LA JUSTICIA DE LA NACIÓN c/EN-PJN- CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN Y OTROS s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”, Expediente N° 12.563/2020, donde se indicó: “...la Corte Suprema tiene arraigadamente dicho que **la misión más delicada de la justicia de la Nación es la de saberse mantener dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones, toda vez que es el judicial el llamado por la ley para sostener la observancia de la Constitución Nacional. De ahí que un avance de este poder menoscabando las facultades de los demás revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público...**” –el destacado me pertenece-.

Que tal como surge de la propia letra de la normativa en pugna –reseñada ut supra-, las obligaciones y deberes establecido por la ley en cuestión alcanza a los/as abogados/as **únicamente cuando a nombre y/o por cuenta de sus clientes, preparen o realicen transacciones sobre las actividades que taxativamente**



prevé el inciso 17) del art. 20 de la Ley N° 25.246 y siempre que no hayan obtenido la información relevante en las que estén sujetos al secreto profesional. Máxime, teniendo en cuenta que la Resolución UIF N° 48/2024, expresamente indica que “*no es Cliente, toda persona humana o jurídica o estructura jurídica -nacional o extranjera- que requiera los servicios de un abogado para su defensa en procesos judiciales, administrativos, arbitrajes o mediaciones, incluido el asesoramiento sobre como iniciarlos o evitarlos*” -véase 57 art. 2 inc. b)-.

Que por las constancias de la causa, jurisprudencia citada y doctrina mencionada, es que corresponde rechazar la demanda instaurada por la parte actora.

XII.- Que el Sr. Fiscal Federal, en su dictamen de fecha 1/07/2024 (8.59 hs.), sostuvo: “*...De las actividades listadas, se observa que se trata de intermediaciones en la compra o administración de bienes o cuentas bancarias y creación organización de personas jurídicas, tareas ellas que pueden ser realizadas tanto por letrados como por otros profesionales... las cuales en la medida que queden alcanzadas por el secreto profesional, no existirá la obligación de informar a la UIF de las operaciones en cuestión, como tampoco las demás obligaciones complementarias establecidas por la normativa... no se observa arbitrariedad o ilegalidad alguna en el obrar del Estado Nacional que resulte manifiesta, exigida en los artículos 43 de la Constitución Nacional y el 1° de la Ley 16.986 como requisito para admitir la acción de amparo... estimo que no se encuentran debidamente*





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 4

reunidos en el sub lite los recaudos exigidos por la Ley 16.986 para que resulte procedente la acción promovida, por lo que considero que V.S. debería rechazar el amparo interpuesto...” (el destacado me pertenece).

XIII.- Que, en cuanto a las costas de la presente, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y las particularidades del caso, corresponde imponerlas en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).

Por ello...

FALLO:

1) Rechazando la acción de amparo intentada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Ello, de conformidad con lo dispuesto en los considerandos I a XII.

2) Imponiendo las costas por su orden, de conformidad con lo expresado en el considerando XIII.

3) Protocolícese, y notifíquese electrónicamente a las partes y al Sr. Fiscal Federal interviniente.

4) Comuníquese al Registro de Procesos Colectivos. Ello, de conformidad con lo normado en las Acordadas Nros. 32 /2014 y 12/2016 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

DRA. RITA MARIA AILAN
JUEZ FEDERAL

